

C.A. de Temuco

Temuco, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

**VISTO:**

Que, en la causa RIT O-120-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la Jueza Titular Sra. Marta Paola Álvarez Basaez, en sentencia definitiva de veintidós de julio de dos mil veintitrés se pronunció respecto demanda de reconocimiento de la existencia de la relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales y nulidad de despido, deducida por CESAR ANDRES FABRICIO DÍAZ ARRIAGADA, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, resolviendo: “I.- Que **SE ACOGE** la demanda de declaración de relación laboral y en consecuencia se declara que entre don **CESAR ANDRES FABRICIO DIAZ ARRIAGADA**, Rut N° 18.147.885-3, y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por don ROBERTO FRANCISCO NEIRA ABURTO, alcalde, existió una relación de carácter laboral que se prolongó desde el 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022. II.- Que **SE ACOGE** la demanda de despido injustificado y en consecuencia se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a.- Indemnización sustitutiva del aviso previo: \$662.000.-b.- Indemnización por 04 años de servicio: \$2.648.000.- c.- Incremento el 50% conforme al artículo 168 b) del Código del Trabajo: \$1.324.000.- d.- Feriado legal: \$926.814.- III. **SE RECHAZA** la demanda de nulidad de despido y pago de cotizaciones previsionales. - IV.- Las prestaciones otorgadas serán reajustadas y devengarán intereses en la forma prevista en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda.- V.- Cada parte soportará sus costas.- VI.- Se deja constancia que para los efectos de la ley 21.389, se consultó el Registro Nacional de deudores de pensiones alimenticias y al día de hoy la actora no figura en el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJDFXXCDWL

mismo.”

En contra de esa sentencia, la abogada de la parte demandada interpone recurso de nulidad, fundado en el artículo 477 del Código del Trabajo con relación al artículo 453 del mismo cuerpo legal.

Con fecha dieciocho de junio del año dos mil veinticuatro, se efectuó la vista de la causa, donde compareció el abogado Christian Hormazábal Wagner en representación de la parte demandada y recurrente y el abogado Sebastián Painemal Granzotto en representación de la demandante y recurrida.

### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.**

**PRIMERO:** Que, el recurso de nulidad laboral es un medio de impugnación, de carácter extraordinario, de derecho estricto y de invalidación que procede sólo contra las sentencias definitivas y por las causales expresamente señaladas en la ley, cuyo objeto es invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo la sentencia definitiva. Sobre el particular, los tribunales superiores de justicia han resuelto reiteradamente que al ser un medio de impugnación extraordinario de decisiones jurisdiccionales, este recurso es de derecho estricto, debiendo ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo que su procedencia se somete a la naturaleza de la resolución impugnada, a la concurrencia de las causales de impugnación expresamente establecidas en la ley y a la correcta selección por el recurrente de las causales en relación con las circunstancias en que las funda.

**SEGUNDO:** Que, como causal de nulidad de esgrimió la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Señala en su recurso lo siguiente:

1.- La Magistrada, doña Marta Paola Álvarez Basacz, Juez



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJDFXXCDWL

Titular del Juzgado del Trabajo de Temuco, luego de referirse a todos y cada uno de los argumentos expresados por esta parte al oponer la excepción de incompetencia del Tribunal, termina concluyendo en su parte considerativa que existe una relación laboral, no obstante, previamente y sin las formalidades que le ordena el artículo 453 del Código del Trabajo, desestimó la excepción de incompetencia en la audiencia preparatoria y conforme consta en el acta respectiva, del siguiente modo:

*“EL TRIBUNAL RESUELVE EXCEPCION DE INCOMPETENCIA: El Tribunal rechaza la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada sin costas por los términos señalados en el audio, registro oficial de esta audiencia.”*

2.- No obstante, y pese a que el desarrollo de la sentencia y especialmente la parte considerativa y resolutive se subsume en la incompetencia del Tribunal, se pronunció anticipadamente sobre la excepción, sin prestar observancia a lo prescrito en el artículo 453 del Código del Trabajo.

3.- En lo que importa, dicha norma establece que el Tribunal deberá pronunciarse de inmediato respecto de las excepciones de incompetencia, siempre que su fallo pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso, pero cuando ello no le es posible, debe suspender la audiencia por el plazo más breve posible o dejarlo para resolver en la dictación de la sentencia definitiva.

4.- De tal modo, infracción de norma expresa, se pronunció sobre la excepción de incompetencia, rechazándola anticipadamente, sin embargo, a lo largo del fallo cuya nulidad se solicita, se refiere extendidamente sobre el mismo, descartándolo de forma tácita, y sin pronunciamiento alguno al respecto en su parte dispositiva.

5.- La infracción a la norma imperativa referida, produce efecto en lo sustancial de lo dispositivo del fallo, al no observarse las normas procesales que el legislador ha fijado para la excepción en comentario.

6.- De suerte que, habiéndose pronunciado con anticipación



sobre una cuestión que, de acuerdo a la propia argumentación del fallo, terminó refiriéndose en su totalidad respecto del mismo, haciéndose cargo de todos los argumentos esgrimidos por esta parte, no obstante, sin que en lo dispositivo de la sentencia efectúe declaración alguna en torno a la excepción, que desestimada anticipadamente, fue latamente desarrollada en la parte considerativa del fallo.

7.- Señaló de forma textual que *“Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”*, sin embargo, aun así, infringió la norma, e igualmente transmutó un contrato de naturaleza civil o privada, en una relación laboral, sin detenerse, por supuesto a declarar derechamente que se producen los efectos del contrato de trabajo regulados en el Código del ramo, mucho menos refiriéndose a lo medular que esta parte expuso durante el transcurso del litigio, y que no es otra cosa que la excepción de incompetencia alegada por esta parte.

8.- La sentenciadora sin observancia de una norma expresa, utilizó un criterio interpretativo para transformar una relación contractual de prestación de servicios en una relación laboral en base al desarrollo pormenorizado de los elementos de una relación laboral, invocando el principio de primacía de la realidad entre otros argumentos de descarte, finalmente, de la excepción alegada.

9.- A mayor abundamiento, cita jurisprudencia sin tener a la vista lo expresado en la Ley 21.526 de fecha 28 de diciembre de 2022. Por cierto, toda la jurisprudencia que cita es anterior a la dictación de esta ley. Pese a ello, efectúa la interpretación y llega a sus conclusiones con omisión o contravención expresa a la norma de la referida y argumentando de forma reiterada la interpretación que efectúa respecto del artículo 76 de la ley antes citada, y que dicho sea de paso incorpora una modificación al artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

10.- El artículo 76 de la ley 21.526, como se ha explicado



sostiene que: *“Para efectos del artículo 4 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos específicos los servicios que se presten por las personas contratadas en programas comunitarios con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del decreto N°54, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; o en actividades o programas financiados con cargo a recursos transferidos a la municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividades específicos del sector de salud municipal”.*

11.- En este sentido, la sentencia ha declarado la existencia de relación laboral entre las partes, relación que a juicio del sentenciador debe entenderse existente desde el primer contrato suscrito entre las partes. Por otro lado, no es menos importante establecer que dicha declaración no puede contener efectos retroactivos que alteren principios como la legalidad o las atribuciones que tiene la Municipalidad dentro de aquellas que la misma ley le otorga.

La causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que en concreto se trasgrede el artículo 4 de la Ley 18.886.

12.- Asimismo, la sentencia cuya nulidad se reclama al desarrollar el artículo 74 de la ley 21.526, justificó su inobservancia como se dijo, citando jurisprudencia que razona del mismo modo que se hacía, hasta la entrada en vigencia de la referida ley el 28 de Diciembre de 2022. Es decir, toda la jurisprudencia citada, es anterior a la entrada en vigencia de la ley.

13.- Al respecto, cabe mencionar que esta materia ya ha sido desarrollada por este mismo Tribunal, que en causa rit O-184-2023, interiorizándose en la materia, lo ha tratado de forma tal que, comprende en plenitud lo que se ha venido alegando de forma insistente, y que en su considerando octavo, señaló que: *“OCTAVO:*



*Que por otra parte este Tribunal en situaciones anteriores ha estimado y recalificado una vinculación a honorarios como laboral, ello lo es únicamente sobre el supuesto, de verificar que el ámbito de la contratación a honorarios excede el marco para el cual se establece y autoriza este tipo de contratación, esto es, excediendo el ámbito legal previsto en el artículo 4 de la Ley 18.883 y en que si bien resulta ser una realidad la proliferación de las contrataciones a honorarios en la administración pública y entre ellos los municipios, la contratación a honorarios hay que distinguirla dependiendo de las labores para las que se contrata, así la propia Ley 21.526, de fecha 28 de diciembre de 2022, reconoce estas diferencias, en que en su artículo 74 se faculta a los municipios para modificar la contratación a honorarios o sumaalzada o asimiladas a grado pasando a ser contratadas por el Código del Trabajo, en aquellas labores no transitorias y permanentes para el municipio, pero manteniendo el criterio de la contratación a honorarios para el caso de contratación para cometidos específicos, en los que incluso el legislador, zanjando la duda interpretativa establece, que para efectos del artículo 4 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos específicos los servicios que se presten por las personas contratadas en programas comunitarios con cargo al subtitulo 21, ítem 04, asignación 004, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determinó Clasificaciones Presupuestarias; o en actividades o programas financiados con cargo a recursos transferidos a la municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividades específicos del sector de salud municipal. Cometidos específicos para los que consta y se acredita fue contratada la actora, por lo que su contratación a honorarios se ha verificado dentro del ámbito legal. Se suma a lo anterior que este Criterio asimismo haba sido sentado por el Dictamen N°E173171/2022, de fecha 10.01.2022, de la Contralía General de la República que imparte instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos*



*de la administración del Estado y que reinterpreta o realiza un nuevo análisis del régimen de contratación a honorarios en la Administración del Estado, Reinterpretando los artículos 11 de la ley N° 18.834 y 4 la ley N° 18.883, para sostener que “sobre la materia es necesario señalar que esta Contralora General ha manifestado que, por regla general, la contratación a honorarios solo procede para realizar tareas accidentales y, excepcionalmente, para efectuar labores habituales cuando se trata de cometidos específicos, esto es, tareas claramente individualizadas y determinadas en el tiempo, sin que lo anterior*

*signifique que una entidad pública pueda llegar a desarrollar sus funciones permanentes a través de este procedimiento. Lo que reitera y refuerza lo concluido en cuanto a que la actora al ser contratada para cometidos específicos, esto es, tareas claramente individualizadas y determinadas en el tiempo, su contratación a honorarios lo fue en marco y dentro de la habilitación legal de la contratación a honorarios por parte de la Municipalidad de Temuco”.* Sobre el razonamiento de esta sentencia, dictada recién el 04 de julio de 2023, cuyos hechos son similares en lo esencial con la causa que motiva el presente recurso de nulidad, es que se justifica aún más lo que esta parte ha venido sosteniendo desde algún tiempo, y que en dicho caso, concluyó acertadamente con el rechazo de la demanda en contra de mi representada.

14.- Que, al ordenar el pago de los recargo e indemnizaciones se estaría desconociendo, entre otras cosas, que no nos encontramos ante una hipótesis típica en la cual un empleador utiliza el contrato a honorarios como un subterfugio o fraude, ocultando una relación laboral. En la especie, esta relación de contratación nace a la luz como un contrato de prestación de servicios, lo cual se encuentra amparado por la ley 18.883 en su artículo 4.

15.- Que, la vinculación contractual nace al amparo de un estatuto legal determinado, establecido en la norma legal, que otorgaba una presunción de legalidad al mismo, según lo dispone el artículo 3



inciso final de la ley N° 19.880 al señalar que *“Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios”*, por lo que en principio, la contratación no es ilegal, y que además fue cumplida por la Municipalidad de Temuco de buena fe desde, que realizó la retención de los impuestos de las boletas de honorario emitidas por el actor, quien en su oportunidad, recibió la respectiva devolución del impuesto a la renta, cuestión que fue alegada en la respectiva observaciones a la prueba de acuerdo a la prueba rendida en la respectiva audiencia de juicio, en lo que concierne al pago de cotizaciones, por la no exhibición de certificado de cotizaciones, o de renuncia a hacerlo en contravención con la ley 21.133 que con el objeto de procurar el bienestar de los trabajadores independientes, tiende a incorporarlos en los regímenes de protección social en materia de salud y pensión, mediante la obligatoriedad de efectuar cotizaciones con estos propósitos.

16.- Es decir, si bien la sentenciadora determinó la existencia de una relación laboral, aquello resulta del todo contradictorio cuando se pronuncia sobre el pago de cotizaciones previsionales y de salud, propias de un empleador, que se rigen por el contrato de trabajo.

17.- En este mismo orden de ideas, y en atención a que ambas partes estaban de acuerdo en el hecho que se trataba de un contrato civil, sólo puede concluirse que la parte demandada estaba impedida de ejercer la retención de una parte de la remuneración del actor para proceder al pago de sus cotizaciones previsionales, desde que aquellas eran incompatibles con la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, así como de las obligaciones recíprocas pactadas, entre las que destacan los pagos de impuestos a realizar por parte de la Municipalidad, así como también la obligación del propio demandante de enterar los pagos de las cotizaciones previsionales en forma voluntaria, tal como se lo permite y posteriormente le obliga la Ley del ramo.





18.- Que conforme lo anterior es que se considera que no resulta posible congruente determinar que, si bien existió una relación laboral, resulta improcedente el pago de cotizaciones previsionales.

19.- El no pago de cotizaciones, naturalmente deviene de la inexistencia de una obligación de hacerlo derivada de una relación laboral, o como naturalmente la sentenciadora elude, un contrato de trabajo. Y ello resulta congruente toda vez que esta demandada a enterar el pago de los conceptos señalados al inició, no desatendió el principio de legalidad que ampara y sobre todo, obliga a los actos de la administración pública, así como también relevando el principio de la autonomía de la voluntad de quienes contratan de la forma el demandante y mi representada lo hicieron.

20.- En consecuencia, siendo un hecho el que los contratos que unieron a las partes fueron suscritos como contratos de prestación de servicios a honorarios, que estos tienen una presunción de legalidad de acuerdo a los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política de la República y según lo dispone el artículo 3 inciso final de la Ley N° 18.880 que no resulta posible condenar al pago de los conceptos señalados, toda vez que mientras rigió la relación contractual de naturaleza eminentemente civil, la Municipalidad cumplió con la obligación contractual y legal que le asiste.

21.- Corolario de lo expresado, es que la sentenciadora, utilizó indicios e incluso los propios dichos del actor, para establecer la existencia de un vínculo de laboralidad, empero, el contrato que liga a las partes es un contrato de prestación de servicios a honorarios.

Modo en que los vicios han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

1.- Por lo precedentemente expuesto, no cabe duda que tanto el procedimiento, como la sentencia posee un vicio y que ésta infracción ha influido en lo dispositivo del fallo, toda vez que ha establecido un pago que contradice la naturaleza misma de la declaración de relación laboral cuando se trata de órganos de la administración del estado,



estableciendo una obligación que no solo resulta gravosa para las arcas fiscales, sino también indebida, considerando que durante la relación entre demandante y demandado, siempre se cumplió con lo que, hasta ese momento, era la legalidad del contrato suscrito.

2.- En consecuencia, la nulidad alegada y contenida el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con la omisión sobre la incompetencia o si se quiere, los deficientes fundamentos para desestimarla, y la errónea interpretación del artículo 4 de la ley 18.883, en concordancia con el cumplimiento de la obligación de “los empleadores” respecto a las obligaciones derivadas de una relación propiamente laboral, los recargos a los que mi representada fue condenada, el rechazo de la demanda en lo que respecta al pago de las cotizaciones previsionales, concepto propio y derivado de una relación laboral, conlleva a la conclusión que la sentencia que se impugna adolece de vicios sólo reparables por la vía de la nulidad.-

Por tanto, de conformidad con el mérito de lo expuesto, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 453, 477, 478 y 479 del Código del Trabajo, ruego a V.S.I. Se sirva tener por interpuesto recurso de nulidad en tiempo y forma, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 22 de julio de 2023, declararlo admisible para que, en definitiva, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en conocimiento del recurso, lo acoja y resuelva que: I) Se ACOGE el recurso de nulidad interpuesto por la Ilustre Municipalidad de Temuco, en contra de la sentencia del Juzgado del Trabajo de Temuco, de fecha 22 de julio de 2023, y en consecuencia se declara que; II) Se ANULA, la sentencia recurrida, por aplicación de las causales descritas en los artículo 477 del Código del Trabajo, estos por haberse violado normas del debido proceso, invalidando la misma completamente. III) Se condena en costas a la recurrida.

**TERCERO:** Que, habiéndose invocado como causal del recurso la establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, cabe señalar que al respecto la jurisprudencia ha determinado



reiteradamente que ella se configura cuando la ley que se dice infringida se ha aplicado a casos no regulados por la misma; cuando no se ha aplicado a los casos específicamente regulados por ésta; o, cuando habiéndose aplicado, no lo ha sido en forma correcta, existiendo conformidad en cuanto a los hechos establecidos en la causa. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 477 y reafirmado en el inciso tercero del artículo 482, también del Código del Trabajo, es indispensable que la referida infracción tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, es decir, que sea ésta y no otra consideración la que lleve a resolver en el sentido que lo hizo el sentenciador. Esto fija la competencia de la Corte para dilucidar la cuestión que se somete a su conocimiento.

**CUARTO:** Que, en relación a la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, esta se invoca por discrepar la recurrente en cuanto a la conclusión del tribunal, señalando que la sentenciadora sin observancia de una norma expresa, utilizó un criterio interpretativo para transformar una relación contractual de prestación de servicios en una relación laboral en base al desarrollo pormenorizado de los elementos de una relación laboral, invocando el principio de primacía de la realidad entre otros argumentos de descarte, lo que finalmente condujo al rechazo de la excepción de incompetencia alegada; agregando que no resulta congruente determinar que si bien existió una relación laboral, resulta improcedente el pago de cotizaciones previsionales; transgrediendo el artículo 4 de la Ley 18.883.

**QUINTO:** Que, en cuanto a la excepción de incompetencia, ello quedó claramente resuelto en la oportunidad procesal correspondiente, según lo señalado expresamente el Considerando “CUARTO” de la sentencia, al señalar “ Que celebrada la audiencia preparatoria con la asistencia de las partes el Tribunal rechaza la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada sin costas por los términos señalados en el audio, registro oficial de esta



audiencia”.

A mayor abundamiento, podemos agregar que la misma sentenciadora en el considerando “SEXTO”, señaló, “Que en relación a la excepción de incompetencia planteada por la demandada, como se dejó establecido en la audiencia preparatoria, siendo criterio de esta sentenciadora que este tribunal resulta plenamente competente para conocer de estos antecedentes, desde que lo discutido es determinar si en la especie nos encontramos frente a un vínculo que pueda ser calificado de laboral; se rechazó la excepción de incompetencia planteada por la demandada”.

**SEXTO:** Ahora bien, en cuanto a la alegación de la aplicación de la Ley 21.256 en cuanto modifica el artículo 76, que “Otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales”, publicada el 28 de diciembre de 2022, consigna en su artículo 76, lo siguiente: “Artículo 76.- Para efectos del artículo 4 de la ley No18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, se tendrán como cometidos específicos los servicios que se presten por las personas contratadas en programas comunitarios con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, del decreto No854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias; o en actividades o programas financiados con cargo a recursos transferidos a la municipalidad por otro organismo, público o privado, o en programas o actividades específicos del sector de salud municipal”; la sentenciadora aborda esta alegación en su considerando Octavo y siguientes.

**SEPTIMO:** Que, la sentenciadora establece que lo discutido en el presente juicio, es la naturaleza del vínculo jurídico que vinculó a las partes pese a la denominación de contrato de honorarios, o en su caso basado en realidad, un contrato de carácter laboral, atendido el vínculo de subordinación y dependencia entre las partes; teniéndose



presente que los contratos se suscribieron bajo artículo 4 de la ley 18.883.

**OCTAVO:** La sentencia en el considerando “DUODECIMO” hace una relación detallada de los documentos acompañados por ambas partes, correspondiente a los decretos alcaldicios que aprueban los contratos de honorarios del actor, a fin de dilucidar en lo que atañe a la calificación de relación laboral al vínculo que ligaba a la actora con la Municipalidad de Temuco. Acto seguido, agrega en el considerando Décimo tercero, que en relación a la prestación de servicios a honorarios desempeñada por el actor desde septiembre de 2018, se analizará en los términos del artículo 4 de la ley 18.833, concluyendo en el considerando **DECIMO CUARTO**, lo siguiente “Que de esta forma es posible concluir que no se trata de labores accidentales o un cometido específico. En efecto, teniendo presente que conforme al artículo 118 inciso cuarto de la Constitución Política de la Republica establece que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunicad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. En la especie, las actividades desarrolladas por el actor se enmarcan en Programa de vigilancia en ciclo vías y televigilancia. De esta forma no concurren los requisitos del artículo 4 del Estatuto para funcionarios municipales, debiendo analizarse si estamos frente a un contrato de trabajo”.

**NOVENO:** Así, la sentenciadora en el considerando “DECIMO SEXTO”, concluye: “Que como se ve en la especie concurre la mayoría de los presupuestos que permiten configurar que entre las partes existió un contrato de trabajo y quedan acreditados con el mérito de la documental acompañada consistentes en los decretos que aprueban los contratos suscritos por la actora y con el mérito de las declaraciones de los testigos que declararon por la demandante, quienes se refirieron a las labores que desarrollaba, que



debía cumplir horario. Se trata de labores que se mantienen en el tiempo ya que no se acredita que estuvieran acotadas a un plazo de inicio y término”.

Que, en consecuencia en la especie al resolver la sentencia la no concurrencia de los requisitos del contrato de honorarios y si los que permiten concluir la existencia de un contrato de carácter laboral, al que se le puso término sin cumplir con las formalidades del despido, desde que ni siquiera consta que se haya comunicado el término de sus servicios, no se ha podido infringir la ley como lo denuncia la recurrente, teniendo además presente los fundamentos que se desarrollan en la sentencia en forma clara y precisa, para analizar los requisitos que han debido cumplirse para descartar las alegaciones de la parte demandada en cuanto a configurarse la existencia del contrato a honorarios.

Por lo deliberado precedentemente, el recurso de nulidad será desestimado.

Y teniendo presente, además, los artículos 474 y siguientes, 480, 481, 482 y 485 del Código del Trabajo, se declara, que **SE RECHAZA** sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por CRISTHIAN HORMAZABAL WAGNER en representación de la **MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**, en contra de la sentencia de fecha veintidós de julio de dos mil veintitrés, dictada por doña Marta Paola Álvarez Basaez Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, la que en consecuencia no es nula.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

NºLaboral - Cobranza-451-2023. (csd)



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJDFXXCDWL

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por su Presidente Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici, Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez, y Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba. Se deja constancia que el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici y el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez, no firman la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.

En Temuco, a veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJDFXXCDWL